

Reformas en el sector eléctrico en Asia*

Marta Pahissa

INTRODUCCIÓN

La mayor parte del crecimiento de la demanda en electricidad desde 1990 se ha registrado en los países en vías de desarrollo, donde el consumo por cápita ha subido más rápido que los mismos ingresos. El descenso de los índices de aumento de la población y el vertiginoso crecimiento económico de algunas economías asiáticas han aumentado rápidamente parte de las rentas, lo que ha triplicado, por ejemplo, el uso de electricidad en los edificios entre 1971 y 1996. La aceleración en el consumo energético de países como China o India generarán un gran impacto en el mercado de la energía mundial y en el entorno durante las próximas décadas. La economía china se ha multiplicado por más de 4 desde 1980 y la demanda de electricidad ha subido más del 400% por las compras de electrodomésticos. La Agencia Internacional de la Energía prevé que, sobre las bases de las políticas actuales, la demanda de electricidad en el mundo se duplicará entre 2000 y 2030, que el incremento más marcado se registrará



en el mundo en vías de desarrollo y el crecimiento más acelerado en las viviendas de estos países.

Con estas perspectivas y en el contexto de la extensa política de liberalización económica iniciada por el Fondo Monetario Internacional (IMF) y los bancos multilaterales de desarrollo, las reformas en el sector de la energía en los países en vías de desarrollo —en términos de producción, uso y propiedad—, se ha convertido en un factor primordial para estas organizaciones. Las crisis que sufren los sistemas estatales de generación y distribución eléctricos —el funcionamiento de los cuales condiciona la actividad en muchos otros sectores económicos—, han servido de justificación para promover la *reforma* y la *privatización* del sector, prometiendo incrementar la inversión, la competitividad y la eficiencia.

Pocos discutirían la necesidad de reformas en el sector eléctrico en estos países, pero la simplicidad que conlleva aplicar un modelo unitario a diferentes realidades nacionales, parece

* Información extraída de:

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH, «Profiting from poverty. The ADB, Private sector and development in Asia». Bangkok, Tailandia, abril 2001. PRAYAS (ENERGY GROUP) et al., «Electricity sector reforms in Asia: experiences and strategies. A compilation of selected papers prepared for the Asia Power Sector Reforms Workshop». Bangkok, Tailandia, octubre 2002.

WORLDWATCH INSTITUTE, State of the world 2004. Special Focus: The Consumer Society. Washington DC, USA, enero 2004. Edición en castellano, Icaria-Fuherm.

responder en gran medida a la comodidad de prestamistas e inversores para realizar sus operaciones comerciales a través de fronteras. Además, la realidad demuestra que la *privatización* del sector no es precisamente la panacea para la eficiencia, la competitividad y el desarrollo. Más bien al contrario, los efectos de la privatización sobre los usuarios de electricidad, potenciales y existentes, sobre comunidades rurales y urbanas, y la agresión al medio ambiente, todo mezclado con gobiernos poco responsables, han acabado promoviendo el desarrollo insostenible y la exclusión de futuros modelos diferentes para la planificación democrática y el uso de energías más limpias y accesibles. Las reformas han modificado la gobernabilidad, el financiamiento, el precio de consumo, el funcionamiento, la calidad y la disponibilidad del servicio de energía doméstica en Asia. En varios países, las pérdidas masivas de puestos de trabajo en el sector, o la perspectiva de ello han movilizadado a trabajadores y sindicatos, mientras que el incremento incesante de los precios de la electricidad ha llevado a granjeros, comerciantes y particulares a protestar en las calles.

A largo plazo, estas reformas en el sector eléctrico, determinarán el espectro de energías que usa un país, el nivel de apoyo en las fuentes nacionales *versus* combustibles importados y cómo los recursos naturales serán consumidos y administrados durante décadas. La liberalización del sector energético ha reforzado el *planeamiento energético a gran escala, centralizado y basado en combustibles fósiles*, lo que impide cualquier giro hacia una electricidad de origen no fósil o no nuclear. También ha provocado el replanteamiento de derechos locales y nacionales para administrar los bienes públicos y su propiedad. La priorización de la inversión extranjera y la casi inexistencia de mecanismos que aseguren tratos justos y *sistemas legales reguladores*, ha promovido la aparición de gigantes del negocio energético como Enron. La falta de control facilita el tipo de contratos corruptos que hizo famosa la planta india de generación eléctrica Dabhol de Enron, arruinando primero su funcionamiento, llevando al borde de la bancarrota a todo el estado, y finalmente subiendo los precios de la electricidad hasta cotas inalcanzables. En muchos casos, la privatización también ha disminuido el número y la extensión de *conexiones* eléctricas en las regiones más aisladas, y ha elevado los *precios* retirando los subsidios en hogares pero no en industrias. Esto

ha comprometido seriamente la posibilidad de progreso de las economías locales y ha dificultado el planeamiento para el desarrollo regional.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA REFORMA

La falacia de la competencia

La reforma del sector energético en el contexto asiático se basa en la idea de la *competencia* entre productores privados de energía para mejorar la eficiencia y la competitividad del sector y reducir los precios de la producción. Para fomentar la competencia, también se promovía la separación entre la *generación* y el *suministro* de energía, de forma que actuaran como empresas independientes con ánimo de lucro. Pero existen decenas de ejemplos que demuestran que estas premisas no funcionaron como se preveía. Contra toda regla, la generación y distribución en el estado indio de Orissa acabó siendo dominada exclusivamente por dos compañías. También una única compañía domina el área de Luzon en Filipinas, donde reside $\frac{3}{4}$ partes de la demanda. En el estado de Andhra Pradesh (India) los productores privados restringen la libertad de las compañías de distribución y transmisión «tratando de reemplazar el monopolio del sector público en un monopolio privado».¹ El sistema tailandés está diseñado para evitar la entrada de nuevos productores, y en Corea del Sur la participación privada en proyectos energéticos a pequeña escala es casi imposible. También el coste en *puestos de trabajo* ha sido claramente un problema en los procesos de reforma. En Corea del Sur, 7.000 trabajadores fueron despedidos para «preparar el sector para la competitividad», y se prevé un posterior recorte del 30% de la plantilla con la inminente transferencia de propiedad de las compañías de generación. Similares procesos de recortes de plantillas profesionales se dieron en Indonesia, Sri Lanka y Malasia.

¹ Ophelia Cowell, *Transnational Institute*, «All hands on deck: Why power sector reform is everybody's business». *Asia Power Sector Reforms Workshop*, 2002.

Porcentaje de electricidad generada con carbón en una selección de países

País	Año	% de electricidad generada que proviene del carbón	Tendencia desde 1990
Polonia	2000	96	estable en el nivel de saturación
Sur África	2000	cerca 92	incremento ligero hacia nivel de saturación
PR China	2000	75	pequeño incremento durante la década
India	1999	75	pequeño incremento
República Checa	2000	73	se mantiene
Alemania	2000	53	cayendo lentamente
USA	2000	52	se mantiene
Dinamarca	2000	47	gran descenso mientras aumenta el uso del gas y la energía eólica (18%)
Corea	2000	42	gran incremento
UK	2001	37	gran descenso desde 1986
Japón	2000	22	gran incremento
Tailandia	1999	18	pequeño descenso
Vietnam	1999	12	gran descenso

Fuente: International Energy Agency

Por otra parte, casi tres cuartas partes de los 93.000 millones US\$ de inversiones privadas en Asia durante la última década han ido a parar a la construcción de 286 plantas de energía fósil, mientras el resto se han invertido en instalaciones, sistemas de distribución y transmisión ya existentes. Invertir los recursos en las tecnologías dominantes y las redes ya establecidas, dificulta las posibilidades de promoción de sistemas eléctricos descentralizados o sistemas rurales externos a la red... Lo que representa un notable problema cuando en el contexto asiático el 80% de las personas sin acceso a la electricidad viven en áreas rurales. En la década en la que el sector energético ha sido reformado en nombre de la competitividad, el mundo pagó entre 2,50 y 3 billones de US\$ en *subsidios a los combustibles fósiles*² y no se abordaron las barreras fiscales y políticas que se ciernen sobre las energías re-

novables. Más difíciles de cuantificar son los beneficios que la consultoría técnica, financiada por bancos multilaterales de desarrollo, ha proporcionado para hacer posible proyectos relacionados con la explotación de carbón, petróleo y gas. En comparación, solamente 1.000 millones de US\$ se han gastado durante el mismo período en proyectos con energías limpias a través del Global Environment Facility.³ Sea cual fuere la extensión final verdadera de la influencia del gasto público a favor de los combustibles fósiles, parece claro que la *reforma para la competitividad* no alcanzó nunca ninguna opción real de juego para las energías renovables.

Subida de tarifas

La escalada de *precios* en Asia, ha sido debida mayoritariamente, a los sangrantes convenios con los productores privados de energía (IPP). Los IPP, que empezaron a proliferar a finales de los ochenta y principios de los noventa para tratar de solventar

² Calculado a partir de Global Green USA, Media Advisory & Climate Change Report, 27 Agosto, 2002.

³ Op. cit nota 1.

la escasez de electricidad durante la crisis de energía en Asia, transfirieron los riesgos del mercado al Estado. Por un lado, obligándolo a comprar toda la energía producida, indiferentemente de si ésta era usada y, por otro lado, exigiendo el pago en moneda extranjera del fuel consumido en el proceso.

Indonesia tuvo que pagar un exceso de 8,46 centavos de US\$ por KWh debido a los contratos estatales con los IPP, y la factura energética en Filipinas se dobló llegando a ser la segunda más alta en Asia aún cuando casi la mitad de la energía que los consumidores pagaron no fue nunca consumida. El estado indio de Orissa —el pionero de la reforma eléctrica en Asia—, soportó un incremento del 15% en los impuestos durante nueve años. Mientras el sector energético privado se volvía más abundante y caro, la aplicación de la reforma en la tarifa de los consumidores mantuvo o hasta incrementó las desigualdades en precios y servicios. El nuevo impuesto revisado en Indonesia sostiene que los usuarios domésticos paguen un 71% más que lo que pagaban, mientras que los grandes consumidores pagan un extra del 12,4%.

Despilfarrando energía

En nombre de la *eficiencia*, se han prescrito nuevos préstamos para la reforma del mercado energético, mientras las enormes pérdidas que se producen en los sistemas de generación y distribución se pasan por alto. Hace más de una década se aplicaron nuevas tecnologías en la reforma del sector eléctrico en Orissa, pero en la actualidad casi la mitad de la energía del estado continúa perdiéndose. En Indonesia, diez años después de la reforma, 1/3 de la energía generada se pierde antes de llegar al consumidor final, lo que representa cerca de 3.000 millones de US\$. En el mismo país y aún bajo la amenaza de escasez de energía, el World Bank y el Asian Development Bank no dan soporte a los programas de eficiencia nacionales y presionan al gobierno para que consiga 1.000 millones de US\$ cada año en nuevos préstamos e inversiones destinados a nuevas y enormes plantas de energía privadas.

El desperdicio de energía pero, no es un problema exclusivo del contexto asiático. En otros países como Bulgaria, por ejemplo, «el radio de acción para la eficiencia energética es enorme... [pero] el progreso ha sido lento... porque una

mayor eficiencia en las tecnologías del usuario podría reducir el programa planeado para la expansión del suministro eléctrico». ⁴ Si el objetivo de la reforma fuera realmente incrementar la eficiencia, la necesidad de nuevas plantas energéticas debería ser revisada de forma objetiva y, posteriormente, reducida. Si cada planta de generación eléctrica en el mundo funcionara con la eficiencia que proporciona la mejor tecnología disponible, se ahorrarían 80.000 millones de US\$ anuales. ⁵ Las nuevas plantas asiáticas no disponen de este nivel de eficiencia, pero una gestión prudente de los antiguos modelos reduciría sustancialmente la necesidad de nuevas centrales. Indonesia, por ejemplo, actualmente genera sólo un 40% de la electricidad que sus plantas son capaces de producir. De la misma forma que sería necesario maximizar la producción de las centrales de generación ya existentes, la demanda de electricidad también podría ser drásticamente reducida si el consumidor final dispusiera de tecnologías de mayor eficiencia.

La deuda incabable

Los estados no han sufrido únicamente una descapitalización por la venta de empresas de distribución y generación eléctrica públicas, sino que aún se encuentran más endeudados. El gobierno de Orissa debe cuatro veces lo que debía antes de la reforma del sector energético y Filipinas debe a los IPP más de 4.000 millones de US\$ (a pagar en la próxima década). Indonesia recibió 47.000 millones de US\$, gran parte de ellos como condición para la privatización, y después de la reforma se vio obligada a pagar 135.000 millones de US\$ a los IPP durante los siguientes 30 años. Ahora, debiendo el 50% de su PNB en deuda externa, una rápida privatización total del sector parece ser la única medida que permitiría al Estado recuperar la liquidez. Hubiera costado unos, comparativamente escasos, 6.000 millones de US\$ electrificar los hogares de la mitad de la población que carece de acceso a la electricidad en el mismo país.

⁴ Mohamed El Asir, CEO, Global Environment Facility. Agosto 2002, «Clean Energy: it's about time» *Energy and Sustainable Development*, World Energy Council, 2002.

⁵ Op. cit. nota 1.

Además de la descapitalización y las deudas adquiridas con los productores y otras organizaciones, hay que añadir el endeudamiento provocado por el agotamiento de los recursos nacionales de varios países, que obligan a adquirir también compromisos para la *importación* de combustible para la generación de electricidad. Tailandia, por ejemplo, optó por importar carbón para el consumo de 3 de sus 7 IPP, y Indonesia empezará a no disponer de carbón y petróleo nacional dos décadas antes que sus nuevas centrales eléctricas sean obsoletas. En diez años, este país será un importador neto de petróleo, y en 20, un importador total. Desde entonces, deberá pagar 11.000 millones de US\$ anuales por importaciones de crudo o, si las plantas se cierran antes, miles de millones en compensaciones. En India, las importaciones de petróleo y carbón han aumentado un siete y 16% anuales, respectivamente, durante el período 1991-1999. Y las estimaciones para India indican que en el 2006, la importación de fuel llegará a abastecer el 75% del total de fuel consumido, y la importación de carbón, el 22%. La misma International Energy Agency apunta que en Asia, generalmente, «una mayor apuesta en los abastecimientos locales de gas natural... es una prudente y, probablemente una opción más económica, que la construcción de nuevas plantas de carbón».

Alimentando el cambio climático

Incluso con las llamadas a la prudencia por los devastadores efectos de los gases de efecto invernadero, «la tendencia actual... señala que los combustibles fósiles abastecerán el 90% de la demanda» en 2030.⁶ Y la electricidad —la forma de uso de la energía más común y en mayor expansión—, ya genera el 38% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Actualmente Asia emite una media de 1 tonelada de dióxido de carbono por cápita, frente las 9 de América del Norte y la

media mundial de 4,1, pero el volumen de emisiones llegará a casi triplicarse en 2020 como consecuencia de los planes para aumentar la capacidad de generación de energía con plantas de carbón en India, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.⁷

Las reformas en el sector energético en Asia contribuyen al problema del cambio climático debido a la persistente actitud de conseguir nuevas inversiones extranjeras para cubrir las *previsiones infladas de demanda*, que acaban traducéndose en la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica alimentadas con combustibles fósiles. Además, para acrecentar la tendencia, se añade el flagrante *desperdicio de energía* por sistemas ineficientes y por la sobreproducción de electricidad proveniente de fuentes intensivas en carbono, que marginan cualquier apuesta por la eficiencia, la descentralización o las fuentes renovables. Actualmente Corea, por ejemplo, tiene diferentes opciones de reforma de su sector eléctrico. Incrementar la eficiencia permitiría conservar el capital y reducir la dependencia de las importaciones de fuel, a la vez que se reducirían las emisiones de CO₂ y azufre un 21 y un 25% respectivamente. Si la reestructuración incluyera una nivelación de impuestos y subvenciones, el cambio de uso de carbón a gas natural, reduciría las emisiones de CO₂ un 9%. Pero si la reforma acaba favoreciendo nuevas plantas de generación alimentadas con carbón importado, las emisiones de CO₂ se doblarán, llegando a 51 millones de toneladas en el 2015.

Pero no sólo la atmósfera se resiente, la producción de energía con combustibles fósiles y su utilización afectan al medio ambiente de formas distintas. La exploración y minería del carbón provoca la degradación del suelo debido a hundimientos y fuegos, además de afectar notablemente a las áreas forestales en India, donde las reservas de carbón se encuentran mayoritariamente en bosques primarios. De manera similar, la producción de gas y petróleo genera residuos de perforación líquidos y sólidos que contienen componentes orgánicos volátiles y líquidos que acaban contaminando los sistemas fluviales del alrededor.⁸ En India, con el 60% de la producción de energía basada en carbón y el alto contenido en ceniza del carbón indígena (más del 40% en algunos casos), la producción anual es de entre 80-100 millones de toneladas de cenizas volantes.⁹

⁶ International Energy Agency, 2001. *Key World Energy Statistics*.

⁷ International Energy Agency, 2002 *Outlook*.

⁸ TERI (Tata Energy Research Institute), *State Environmental Action Plan (SEAP), Gujarat: energy subcomponents*, 2001.

⁹ MNES (Ministry of Non-conventional Energy Sources), *Renewable Energy in India: Business Opportunities*, 2001.

Mecanismos de regulación

Según datos del Banco Mundial, únicamente el 30% de los países en desarrollo en proceso de reforma del sector eléctrico llegan a implementar mecanismos de regulación y control adecuados. De acuerdo con el modelo de reforma del Banco Mundial, los países deudores deben establecer órganos reguladores del proceso para evitar abusos y errores, pero este prerrequisito es, a la práctica, obviado por la presión de prestamistas e inversores para acelerar la privatización. En el caso del estado indio de Orissa no se estableció ningún mecanismo de regulación adecuado en el inicio del proceso, y hace diez años que la reforma está en marcha en Indonesia, pero el Estado sigue tratando de esquivar cualquier tipo de órgano de supervisión. Sin mecanismos de regulación la estabilidad financiera, la transparencia del proceso y la participación del sector privado quedan fuera de control.

El factor novedad del proceso de reforma en algunos países y la opacidad en otros, explican parcialmente las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos públicos. Las implicaciones de la reforma para la gente común son al principio difícilmente apreciables. Los temas de energía se perciben como demasiado técnicos para el público para que tengan «opiniones formadas», los especialistas independientes que podrían proveer apoyo al público son escasos y los gobiernos tienden a ser aconsejados exclusivamente por consultores importados a través de los bancos de desarrollo o de las compañías energéticas que ya tienen intereses y compromisos en la privatización. Los «expertos» que Orissa importó costaron al estado indio 66 millones de US\$, aunque los gastos de la receta que dispensaron continúan aumentando.

CASOS «EJEMPLARES»

La privatización de la energía en Filipinas

El Asian Development Bank (ADB) promovió la privatización de la National Power Corporation (Napocor) de Filipinas como solución al endeudamiento masivo de la empresa pública, que debía 3.700 millones de US\$ a prestamistas oficiales y a agencias de crédito y que, además, era subsidiada por 2 millones de

US\$ anualmente por el gobierno filipino. La crisis de Napocor fue claramente coyuntural, el mismo ADB resalta que la administración financiera de la empresa durante el período 1992-97 fue apropiada. El endeudamiento fue causado por la crisis financiera asiática que agravó el peso de la deuda externa de la empresa y la hemorragia de pagos en dólares a los productores independientes de energía (IPP) que habían sido contratados, bajo sustanciosas condiciones, para cogenerar electricidad durante la crisis nacional de energía a finales de los ochenta y principios de los noventa.

El ADB, el Banco Mundial (WB) y el IMF aprovecharon la crisis coyuntural para efectuar un cambio fundamental en la estructura de propiedad del sector energético de Filipinas siguiendo patrones de libre mercado. El ADB se convirtió en la agencia externa que lideró el proceso de privatización de Napocor. Como condición para acceder a los préstamos de 300 millones US\$ del WB y a 400 millones de US\$ del Miyazawa Fund del gobierno japonés, el ADB pidió al gobierno filipino que Napocor fuera privatizado rápidamente.

Las ayudas del ADB casi desaparecieron en 1999 como consecuencia a la oposición al programa de privatización. Los críticos apuntaban que la presión legislativa había empezado sin un estudio del impacto que acarrearía la privatización, además del desconcierto que suponía que los actores privados no asumieran las deudas de los activos que adquirirían. El ADB argumentaba que «la magnitud de la deuda de Napocor es tan grande que no puede ser absorbida por las compañías tras ser privatizada»; y la solución pasaba por imponer una nueva tasa a los usuarios para recuperar la deuda de Napocor (cerca de 10.000 millones de US\$). Otra crítica se basó en que el proceso de privatización se iba a dar sin ningún mecanismo de regulación, lo que podría conminar a abusos y a monopolios. La resolución legislativa final invitaba al monopolio permitiendo la propiedad de los sectores de distribución y generación al mismo grupo empresarial. El grupo Meralco, de la familia Lopez, que influyó notablemente el proceso legislativo, es actualmente propietario del 60% del sector de la distribución y participa de la propiedad de varias corporaciones de generación filipina (Buang Private Power Corporation, Panay Private Power Corporation, First Gas Corporation). La propiedad de los sistemas de generación y distribución consolidan el domi-

nio de este grupo en el mercado del sector energético e imponen un régimen libre y justo de competencia que permitiera disminuir el precio de la electricidad para los consumidores finales.

Reformas en el sector energético en el estado de Orissa (India)

Orissa es uno de los estados más pobres de la India, el ingreso medio por cápita es de 131US\$ frente a la media nacional de 260US\$, y la línea de pobreza alcanza al 49% de la población, frente al 36% de valor medio en el país. Su economía está basada fundamentalmente en la agricultura, $\frac{3}{4}$ partes de la población dependen de ella, pero a la vez es uno de los estados indios más ricos en recursos minerales, contiene $\frac{1}{4}$ de las reservas nacionales de carbón.

Las reformas del sector energético se iniciaron en 1983, Orissa fue el estado «pionero» en Asia. La empresa pública Orissa State Electricity Board (OSEB) controlaba el 100% de la distribución y generación de energía del estado y su funcionamiento fue satisfactorio hasta mediados de los noventa. La Electricity Act de 1948 requiere que los SEBs obtengan un balance mínimo positivo en cada ejercicio, con ayuda de subvenciones si fuese necesario. Pero la OSEB sufría grandes pérdidas en la transmisión y la distribución (40%), una creciente ineficiencia y baja calidad en el servicio de abastecimiento de energía.

Los cinco ejes básicos del programa de reforma fueron: la reestructuración de la OSEB a favor de la corporativización y la comercialización, la privatización (de la generación hidráulica y térmica, de la distribución y la red), la competitividad para la adición de nueva capacidad de generación, la regulación separada del gobierno, y la reforma de las tarifas.

Una parte de la OSEB se convirtió en la Orissa Power Generation Corporation Limited (OPGC), de titularidad pública y creada en 1984 para gestionar la *generación térmica* en Orissa. En 1991, como consecuencia de la apertura del mercado de generación de energía al sector privado, varios proyectos de Productores Independientes de Energía (IPP) se plantearon en Orissa. Las normas fueron muy flexibles para atraer capital privado: se permitía la propiedad 100% extranjera, acuerdos de compra a largo plazo, beneficios asegurados y garantías gu-

bernamentales en los pagos. Más tarde, en 1993 siguiendo las recomendaciones del World Bank, el gobierno de Orissa acabó de dividir la OSEB en la Grid Corporation of Orissa Ltd (GRIDCO) y la Orissa Hydro Power Company (OHPC). De los 997 millones de US\$ en préstamos presupuestados para llevar a cabo la reforma, 350 (35%) provenían del World Bank. Desde 1992 hasta 1995, se implementó un aumento de las tarifas en el consumo de un 67%, que permitieron cubrir los costes de las operaciones de la OSEB. En 1999, el 49% del total del capital de la OPGC cayó a manos de un inversor privado estadounidense, AES Corporation. En 2000, una compañía privada india (BSES) controlaba tres de las compañías de *distribución* y la estadounidense AES controlaba la 4ª del estado; todo el sistema de distribución había sido privatizado, así como el sector de la generación térmica.

Durante el primer año de funcionamiento, las pérdidas de BSES superaban los 50 millones de US\$. En la revisión gubernamental de julio de 2002 se detectó que las pérdidas habían aumentado y que la recaudación de las facturas y la eficiencia habían disminuido. Después de invertir 1.000 millones US\$ en cinco años (3 billones de rupias fueron a parar a manos de consultores extranjeros), se esperaba que el sector energético de Orissa se hubiese convertido en una empresa saneada y con beneficios, que pudiera contribuir a la economía del estado. Lo único que se consiguió con la reforma fue aumentar el precio de la tarifa:

- No se han reducido las pérdidas en la transmisión y la distribución: se esperaba una reducción hasta el 21% y las pérdidas se mantienen al mismo nivel que antes de la reforma, 45%.
- Deterioro de la eficiencia en la facturación: el porcentaje de cantidad facturada cobrada ha bajado del 84 al 77%.
- La gran inversión en capital y revaloraciones han incrementado la deuda de GRIDCO de 8.200 millones de rupias, a 33.000 millones. Obviamente el peso de la deuda se traducirá en un aumento de las tarifas para los consumidores.
- Aumento del coste de generación debido a la revaloración de los recursos: antes de la reforma el precio de generación hidroeléctrica era 0,20 rupias/unidad, después acabó en 0,50 rupias/unidad.

Reformas en el sector eléctrico en Asia

- Las tarifas aumentan pero las pérdidas continúan: durante cinco años la tarifa de la electricidad ha aumentado un 15% anual, pero las pérdidas del sector están en los 4.000 millones rupias anuales.
- No hay inversión de capital: se preveía que la privatización aumentaría la inversión y mejoraría la eficiencia. Las compañías privadas no han invertido en mejoras en la gestión o en las instalaciones.

* * *

El intercambio de experiencias con organizaciones independientes de África, América Latina o Europa del Este puede sumi-

nistrar valiosas comparativas de problemas y aplicabilidad de alternativas. ONG en países donantes pueden desafiar a sus gobiernos por dar soporte y financiamiento a reformas irresponsables o ineficientes. Las organizaciones internacionales de desarrollo necesitarán calibrar la compatibilidad de las reformas con los objetivos de reducción de pobreza, para reducir las discrepancias. Pero sin duda, la base esencial para una reforma apropiada reside dentro del país, donde solamente una respuesta social puede efectuar el cambio hacia un sistema energético más racional y sostenible que refleje mejor el interés público. Sin esto, el actual proceso de reforma del sistema energético continuará siendo demasiado fácil de controlar por los *lobbies* mejor dotados.

